

INFORME INTERNACIONAL SOBRE LA LIBERTAD DE CULTO 2019 - - REPÚBLICA DOMINICANA

Resumen ejecutivo

La constitución establece la libertad de culto y religión. Un concordato con la Santa Sede designa al Catolicismo Romano como la religión oficial del estado y extiende a la Iglesia Católica privilegios especiales no concedidos a otros grupos religiosos. Los privilegios incluyen el financiamiento de sus gastos, incluyendo administración y construcción, derogaciones de visado y exenciones de aranceles aduaneros. Algunos miembros de los grupos no católicos dijeron que no aprobaban la preferencia del gobierno por la Iglesia Católica, la falta de protección legal explícita para las iglesias más allá de lo que la constitución estipulaba, y el tratamiento de iglesias no católicas como organizaciones no gubernamentales (ONG). Según los representantes de los grupos no católicos, si se aprobara un proyecto de ley para registrar y regular las entidades religiosas, podría reducir lo que caracterizaban como un trato desigual de grupos religiosos en el país. Si bien los representantes de los grupos no católicos seguían afirmando que los privilegios especiales otorgados a la Iglesia Católica mediante el concordato eran injustos, esos privilegios administrativos no obstaculizaban su capacidad para practicar su fe en público y privado.

En noviembre, la Universidad Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santo Domingo, la Universidad Brigham Young, el Consorcio Latinoamericano de Libertad de Culto y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días organizaron una conferencia internacional titulada "Libertad de Culto y Dignidad Humana". Los participantes examinaron la contribución de la religión a la sociedad y la forma de promover la libertad de culto en la región mediante la cooperación y la tolerancia.

En noviembre la Embajadora se reunió con funcionarios del Ministerio de la Presidencia para discutir la posición del gobierno sobre los privilegios otorgados a la Iglesia Católica a través del concordato. Los oficiales de la embajada examinaron con los líderes no católicos sus esfuerzos para promulgar una ley de registro y regulación de las entidades religiosas que abordase el acceso desigual a los recursos del gobierno por parte de los grupos religiosos del país. La embajada donó fondos para preservar y digitalizar los archivos del museo que relata la historia de los refugiados judíos acogidos en el país tras huir de la persecución nazi en Europa y compartió estos esfuerzos en sus redes sociales.

Sección I. Demografía religiosa

REPÚBLICA DOMINICANA 2

El gobierno de los Estados Unidos estima que la población total es de 10,4 millones (estimación a mediados del 2019). Según una encuesta del Latinobarómetro del 2019, la población es 49 por ciento católica, en comparación con el 55 por ciento en una encuesta del Latinobarómetro del 2016 y el 68 por ciento en el 2008. La misma encuesta indica que el 26 por ciento de la población es protestante evangélica, en comparación con el 12 por ciento en 2008. La encuesta del Latinobarómetro de 2017 encontró que el 21 por ciento no ha declarado una religión o se identifica como atea o agnóstica, en comparación con el 13 por ciento en 2015. Otras creencias incluyen a los Adventistas del Séptimo Día, los Testigos de Jehová, la Iglesia de Jesucristo y los protestantes no evangélicos. Según una estimación del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica de noviembre, los protestantes evangélicos constituyen aproximadamente el 30 por ciento de la población, siendo los pentecostales los que más crecen.

Según los representantes de la comunidad musulmana, hay aproximadamente de 2.000 a 2.500 musulmanes en todo el país. Los líderes judíos estiman que la mayoría de los aproximadamente 350 miembros de la comunidad judía viven en Santo Domingo, con una pequeña comunidad en Sosua. Hay un pequeño número de budistas, hindúes y bahaíes.

La mayoría de los inmigrantes haitianos son cristianos, entre ellos protestantes evangélicos, católicos y adventistas del séptimo día. Según la Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana, en 2017, el año de la encuesta más reciente, había 498.000 inmigrantes haitianos en el país. Un número desconocido practica el vudú u otras creencias afrocaribeñas como la santería.

Sección II. Situación del respeto del gobierno a la libertad de culto

Marco legal

La constitución establece la libertad de "credo y culto, sujeta al orden público y al respeto de las normas sociales". Un concordato de 1954 con la Santa Sede designa al catolicismo como la religión oficial del estado y extiende privilegios especiales a la Iglesia Católica que no se conceden a otros grupos religiosos. Estos privilegios incluyen la protección especial del Estado en el ejercicio del ministerio católico, la exención del clero católico del servicio militar, el permiso

para impartir instrucción católica en orfanatos públicos, el financiamiento público para financiar algunos gastos de la Iglesia Católica y la exención de aranceles aduaneros.

Para solicitar la exención de los aranceles aduaneros, los grupos religiosos no católicos deben registrarse primero como ONG en la Procuraduría General y el Ministerio de Hacienda. La inscripción en la Procuraduría General, la cual se aplica a las organizaciones sin fines de lucro en general y no es específicamente para grupos religiosos, es un proceso de dos pasos. Primero, la organización debe proporcionar documentación de una dirección fija y los nombres de siete representantes elegidos, tener un mínimo de 25 miembros y pagar una cuota nominal. En segundo lugar, la organización debe redactar y presentar estatutos y proporcionar copias de documentos de identificación emitidos por el gobierno para la junta directiva. Después de inscribirse, los grupos religiosos pueden solicitar al Ministerio de Hacienda la exención de aranceles aduaneros.

La ley prevé el reconocimiento por parte del Gobierno de los matrimonios celebrados por grupos religiosos inscritos en la Junta Electoral Central. La ley exige que las iglesias tengan estatus legal y presencia en el país durante al menos cinco años, que proporcionen una lista de miembros y que capaciten al clero sobre cómo realizar los matrimonios. Las iglesias son responsables de determinar la calificación legal de las parejas, y deben registrar todos los matrimonios celebrados en el registro civil dentro de los tres días hábiles siguientes al matrimonio. El incumplimiento de estas normas puede dar lugar a sanciones por delitos menores o multas, incluidos 100 pesos (2 dólares) por cada día que sobrepase el plazo de registro, la suspensión de la licencia de matrimonio o hasta cinco años de prisión.

El concordato otorga a la Iglesia Católica libre acceso a las cárceles. El gobierno declara que permite el acceso a todas las religiones en las cárceles. Los prisioneros de todas las religiones tienen el derecho de realizar actos religiosos en las cárceles, ya sea en grupo o individualmente.

El concordato y la posterior ley de estudios bíblicos ratificada en el año 2000 exigen estudios religiosos basados en enseñanzas católicas o evangélicas protestantes en todas las escuelas públicas primarias y secundarias. Proporciona a los padres la opción de excusar a sus hijos de asistir a esta clase. Las escuelas privadas están exentas del requisito de los estudios bíblicos; sin embargo, las escuelas privadas dirigidas por grupos religiosos pueden enseñar estudios religiosos según sus creencias.

La ley de estudios bíblicos también ordena que la Biblia sea leída en las escuelas públicas al principio de cada día después del himno nacional. Este aspecto de la ley no se aplica actualmente.

Los misioneros extranjeros pueden obtener un visado de negocios de un año de duración para múltiples entradas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, previa presentación de un documento que ofrezca una prueba de la actividad comercial de la institución o persona del país con la que el misionero esté afiliado. Los misioneros extranjeros pueden renovar la visa antes de que la visa original de un año haya expirado.

El país es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Prácticas del gobierno

Los grupos religiosos no católicos continúan afirmando que el gobierno proporcionaba a la Iglesia Católica un importante apoyo financiero del que no disponen, incluyendo propiedades transferidas a la Iglesia Católica y subsidios a los salarios de los representantes de la Iglesia Católica. Expresaron su insatisfacción con la preferencia del gobierno por la Iglesia Católica, la falta de protección legal explícita para los grupos religiosos más allá de lo que la constitución provee, y el tratamiento bajo la ley de las iglesias no católicas como ONG en vez de como organizaciones religiosas. En marzo se presentó nuevamente un proyecto de ley para registrar y regular las entidades religiosas, que fue examinado por el Congreso Nacional. A finales de año, no se sometió a votación. Algunos líderes no católicos dijeron que esta ley abordaría el acceso desigual a los recursos del gobierno por parte de los grupos religiosos que, en su opinión, resultan del concordato con la Iglesia Católica. Algunos observadores políticos dijeron que como era un año preelectoral, los legisladores y otros se centraron en otros temas.

Una organización religiosa no católica siguió afirmando que el gobierno le exigía pagar aranceles aduaneros sobre los alimentos y otros artículos importados y luego tenían que solicitar un reembolso en lugar de recibir una exención como lo permite la ley. Varios grupos religiosos siguieron informando de dificultades al solicitar y recibir reembolsos de aranceles aduaneros por parte del Ministerio de Hacienda.

Los debates sobre la lectura de la Biblia en las escuelas públicas continuaron. En junio, el Congreso aprobó una resolución que llamaba la atención sobre la falta de aplicación de la ley que exige la lectura de la Biblia en las escuelas

públicas. En respuesta, el Ministerio de Educación emitió una declaración diciendo que no haría cumplir la ley porque violaba la constitución y los derechos de las familias a decidir la fe que sus hijos deben practicar.

Sección III. Situación del respeto de la sociedad a la libertad de culto

En noviembre, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santo Domingo, la Universidad Brigham Young, el Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa y la Iglesia de Jesucristo organizaron una conferencia internacional titulada "Libertad Religiosa y Dignidad Humana". Más de 200 participantes asistieron al simposio de dos días de duración que abarcó diversos temas, entre ellos la forma de promover la libertad de culto mediante la cooperación y la tolerancia en América Latina y el Caribe. Durante la sesión de clausura, los dirigentes religiosos de la región, incluidos Haití, la República Dominicana y Jamaica, firmaron un acuerdo para promover y defender la libertad de culto en los 15 países participantes.

Sección IV. Política y compromiso del gobierno de los Estados Unidos

En noviembre la Embajadora se reunió con funcionarios del Ministerio de la Presidencia para discutir la posición del gobierno sobre el concordato con la Iglesia Católica, el apoyo financiero del gobierno a las iglesias y el estatus legal de otros grupos religiosos.

La Embajadora se reunió con líderes judíos y habló del legado de la libertad de culto, señalando que la República Dominicana fue el único país en la Conferencia de Evian de 1938 que se comprometió a acoger a los refugiados judíos que huían de la persecución nazi en Europa. La embajada donó fondos para preservar y digitalizar los archivos del Museo Judío de Sosua que relatan la historia de los judíos que encontraron refugio en el país durante el Holocausto. La embajada destacó estos esfuerzos en sus plataformas de redes sociales para mostrar los valores de la libertad de culto y la historia del país en cuanto a la aceptación de la fe.

La Embajadora se reunió con líderes de la Iglesia Católica para discutir su papel en la defensa de los derechos de las poblaciones vulnerables del país, incluidas las minorías religiosas. Los oficiales de la embajada también se reunieron con líderes no católicos para conocer los esfuerzos para aprobar una ley que crearía un proceso para registrar y regular las entidades religiosas.